

Los chilenos y la inmigración

Uno de los fenómenos sociales que más han impactado en el perfil demográfico de las sociedades modernas en los últimos años ha sido el de la migración producto de las guerras, la persecución política, la falta de perspectivas económicas y la inseguridad. América Latina no ha estado ajena. Si antes fue el éxodo cubano, hoy lo es —principalmente— el venezolano. Chile —por su situación comparativamente más favorable en términos económicos— ha sido el destino para miles de personas que buscan mejores oportunidades, convirtiendo a la inmigración en un asunto de debate público y preocupación ciudadana.

Eso explica que la encuesta Bicentenario UC comenzara a incluir un módulo de preguntas al respecto a fines de la década pasada, evidenciando que, ya en 2018, el 75% percibía que la cantidad de inmigrantes en el país era excesiva. Hoy esa cifra se eleva al 88%, sin que se haya logrado articular una política pública que logre terminar con las entradas ilegales y permita ingresos ordenados y selectivos. Muestra del mal manejo han sido las confusas señales del Gobierno a propósito del proceso de empadronamiento biométrico realizado entre 2023 y principios de este año: luego de negar repetidas veces las autoridades que este fuera a estar vinculado con una “regularización masiva” de personas ingresadas ilegalmente, se ha terminado anunciando precisamente aquello, bajo el eufemismo de “regularización acotada”. Esto último, por cuanto se demandaría arraigo familiar o laboral e inexistencia de antecedentes penales, cuestiones que parecen de sentido común, pero que no restan masividad a un proceso para el que serían candidatos más de 180 mil empadronados. Consecuencia de esas confusas señales fue el caos desatado el lunes a propósito de una jornada de enrolamiento efectuada por el Registro Civil, que los concurrentes creyeron equivocadamente les serviría para empadronarse. A la vista de aquello, es difícil que las políticas migratorias del Gobierno tengan la credibilidad para evitar que la referida regularización genere un efecto llamada que termine

incentivando más entradas ilegales.

En este contexto, son los impactos en la seguridad pública la mayor preocupación de la ciudadanía. Esta, si bien identifica a la inmigración como una de las causas del aumento de la delincuencia (Bicentenario UC 2023), favorece que los inmigrantes, con sus respectivos permisos legales al día, tengan los mismos derechos de acceso a los servicios básicos que los chilenos. Esta disposición se manifiesta también en que el 59% dice tener una excelente o buena relación con extranjeros, y el 73% declara no haber tenido malas experiencias y reconoce tener un contacto cotidiano con extranjeros tanto en la vida laboral como social.

Uno de los datos que pueden interpretarse como una señal preocupante es que el 19% de los extranjeros afirma que en los últimos 12 meses ha sido “amenazado o maltratado” en una proporción mayor que los chilenos (10%), lo que puede significar un cierto deterioro en las relaciones sociales. Llama la atención también un alza en la declaración —45%— de que los extranjeros limitan las opciones laborales de los chilenos. A ello se agrega la visión de que existiría un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes —70%— que, si bien observa una baja significativa respecto del año anterior, sigue ubicándose entre los más altos porcentajes de percepción de conflicto, comparables con el referido al Estado chileno y los mapuches (71%) y entre gobierno y oposición (79%).

La baja tasa de natalidad del país anticipa serios problemas demográficos a mediano plazo, lo que implica que —para retomar niveles de crecimiento que permitan un progreso sostenido— el país deberá contar con una vasta población activa, compuesta tanto por chilenos como por extranjeros. Ello obliga al diseño de una legislación que permita un ingreso normado, ordenado y selectivo. La encuesta Bicentenario UC evidencia que la disposición de la sociedad chilena se inclina hacia una inmigración acotada y legalizada, manifestando su preocupación por los desbordados ingresos ilegales y sus consecuencias.

La encuesta da cuenta de una ciudadanía preocupada por el desborde migratorio, pero abierta a reconocer los derechos de quienes se mantienen en la legalidad.